

Inmigración y pluriculturalidad

Las enormes desigualdades entre los países ricos del Norte y los pobres del Sur están dando lugar, sobre todo en este último lustro, a fortísimos movimientos migratorios. Junto a claros beneficios económicos para los países del Norte —y la consiguiente sangría para los del Sur—, esta inmigración plantea el grave problema de la integración de las poblaciones que se añaden. Se habla incluso de fracaso en la integración. El riesgo de pérdida de las identidades colectivas genera ya una cierta angustia social. ¿De qué lado podría encontrarse la solución a este problema?

En los últimos diez años, más de cuatro mil candidatos a la inmigración han encontrado la muerte en las fronteras de Europa: la mayoría ahogados en los estrechos de Gibraltar y Sicilia, en el Canal de Otranto (entre Italia y Albania) o frente a las costas canarias; otros por asfixia o hipotermia en transportes peligrosos, por agotamiento o en campos de minas. La frontera meridional de los Estados Unidos ha sido testigo igualmente de defunciones en parecidas circunstancias. Aunque la

mayoría de los inmigrantes entra en Europa a través de los aeropuertos, el riesgo mortal que asumen muchos inmigrantes muestra bien que para un gran número de habitantes del Sur los países ricos del Norte representan la única esperanza de un porvenir mejor. Por ello, todos los indicios apuntan a que el hemisferio Norte seguirá recibiendo importantes remesas de inmigrantes.

La ley de los vasos comunicantes

La causa principal de estos importantes movimientos migratorios es bien conocida: las enormes diferencias de nivel de vida entre los dos hemisferios. O, dicho de otra manera, las condiciones de vida, casi desesperadas, de muchos habitantes del Sur. El problema de la alimentación constituye el más claro síntoma. Cada día, 100.000 personas mueren de hambre (es decir, por falta de la alimentación necesaria) y 842 millones siguen estando mal alimentadas (uno de cada siete habitantes del planeta). El número de personas afectadas por la malnutrición, tras descender durante algunos años, vuelve a aumentar de nuevo: desde mediados de la década de los noventa, son 18 millones más. La comunidad internacional se comprometió a reducir a la mitad, de aquí al año 2015, el número de personas que padecen hambre. Sin embargo la FAO se ha visto obligada a reconocer que, según sus previsiones más optimistas, ese objetivo sólo será alcanzado en 2030.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación mantienen a los habitantes del Sur perfectamente informados del alto nivel de vida del Norte: la televisión por satélite está presente en todas las ciudades del Sur y la radio en todas sus aldeas. No sólo viajan al Norte las elites del tercer mundo, sino también —en busca de una situación mejor— los jóvenes de las clases medias arruinadas y los que disponen de algún capital con el que pagarse el pasaje. La presión migratoria en uno de los vasos es imparable.

Una inmigración necesaria

La proporción de población de origen extranjero representa en España el 6,3% de la población total. Proporciones más elevadas tienen otros

países europeos como Francia (7%) y Alemania (casi un 8%). Estas cifras previsiblemente aumentarán aún, dado, en primer lugar, que se encuentran ya, en territorio español, cerca de un millón de extranjeros no legalizados y, sobre todo, porque se calcula que, en los próximos diez años, harán falta aún unos ocho millones de inmigrantes para que España mantenga su ritmo de crecimiento, en particular para asegurar las pensiones de los actuales sectores activos.

En efecto, la pirámide de edades de la población española, muy alargada y con una base estrecha (larga esperanza de vida y pocos nacimientos), no es ninguna garantía de futuro. Nuestro país tiene el índice de fecundidad más bajo de la UE, que es lo mismo que decir del mundo entero. Según un informe del Instituto de Política Familiar (IPF), la tasa de natalidad ha bajado un 30% en 20 años; y, consecuentemente, el número de niños de menos de 14 años ha disminuido un 40%, mientras que los mayores de 65 años son un 64% más numerosos. El año 2002, las mujeres inmigrantes aportaron más del 10% de los nacimientos.

La población europea autóctona va tomando conciencia de la necesidad de acoger a la inmigración. Según el Eurobarómetro publicado el 8 de marzo pasado, el 56% de los ciudadanos europeos reconoce que los inmigrantes son necesarios en ciertos sectores económicos. El 66% les desea incluso igualdad de derechos (en España este porcentaje llegaba hasta el 86%). Pero, al mismo tiempo, una aplastante mayoría (80%) estaba a favor de reforzar los controles fronterizos, mostrando así una cierta inquietud ante la dificultad de controlar la actual avalancha y ante las consecuencias que ésta pueda producir en un futuro no lejano.

La mano de obra extranjera ocupa, por lo general, los puestos de trabajo que españoles —y europeos, en general— rechazan (obras públicas, construcción, pesca, etc.) por considerarlos demasiado duros o mal remunerados. En algunos casos, como por ejemplo en el de los refugiados «clandestinos», han sido objeto de un jugoso mercado de empleo ilegal; tal cosa ha podido suceder en Italia con las tramas albanesas de mano de obra o con los 80.000 refugiados del campo de concentración francés de Sangatte (junto al túnel de La Mancha, cerrado a fines de 2002) que lograron pasar al Reino Unido.

La difícil integración

De los extranjeros regularizados en España (un millón menos que los inscritos en el Padrón Municipal), una minoría (el 34,7%) son comunitarios, y la mayoría (65,3%) no comunitarios. Por nacionalidades, los ecuatorianos son los más numerosos (14,6%), seguidos de cerca por los marroquíes (14,2%) y, a mayor distancia, por los colombianos (9,1%), los rumanos (5,1%) (el grupo que más aumentó en 2003) y los argentinos (4,1%), forzados a emigrar desde la grave crisis económica de su país.

La mayor parte de la inmigración se dirige a las grandes ciudades industriales. De ahí que, en Barcelona por ejemplo, los extranjeros representasen, el 1 de enero de este mismo año, el 12,8% de la población empadronada (un cuarto de europeos, otro cuarto de africanos y asiáticos y más de la mitad de latinoamericanos). Dos características de esta población extranjera de la ciudad condal llaman la atención: la primera que forman un mosaico de 154 nacionalidades diferentes; y la segunda que el 27,3% de ellos tienen estudios universitarios (frente a un 17,1% de los barceloneses de origen). Dos datos que pueden resultar de considerable incidencia en la futura configuración cultural de la ciudad.

Por su parte, el último Padrón Municipal de la villa de Madrid registra un 13,59% de extranjeros, lo cual significa que el porcentaje de inmigrantes se ha incrementado un 330% en los últimos cuatro años, mientras que la población nativa desciende en casi todos sus distritos. El caso extremo lo protagoniza el barrio de Lavapiés, verdadera encrucijada de razas y culturas, con serios problemas de integración social, donde el 30% de la población es de origen extranjero.

El millón de «sin papeles» plantea a la administración española un grave dilema: expulsarlos a todos, además de inhumano, sería de un coste elevadísimo; por otro lado, regularizarlos causaría un «efecto llamada» a nuevos inmigrantes ilegales. Incluso –dicen algunos– promulgar una ley de inmigración e inclusión ciudadana podría producir parecido efecto

(Rodríguez Zapatero considera este problema un «*asunto de Estado*» y ha anunciado ya «*un gran acuerdo nacional en materia de inmigración*»). España —y todo el hemisferio Norte— se encuentran, ante la inmigración, en un punto muerto que indica a las claras la falta de un proyecto de sociedad para nuestros países. O, tal vez, lo que ese punto muerto está indicando sea que la solución radical al problema se encuentra fuera de nuestras fronteras, en un serio intento por cambiar las condiciones socio-económicas de los mismos países de los que provienen los inmigrantes.

Estos datos y las previsibles tendencias migratorias de los próximos años, si no cambia la actual situación socio-económica mundial, hacen prever que Europa puede verse obligada a pasar de un modelo de sociedades culturalmente unificadas (espontáneamente y/o por lo fuerza) hacia unas sociedades pluriculturales. Hasta la fecha, la homogeneidad cultural ha sido, casi siempre, la norma en las sociedades tradicionales del mundo entero e incluso en las sociedades modernas de Europa. En éstas últimas, la homogeneidad cultural se consiguió muchas veces al precio de notables esfuerzos (tal fue el caso de Francia, donde, a comienzos de la Revolución Francesa, sólo un 13% de la población tenía el francés como lengua materna). No es una casualidad que el llamado «velo islámico» haya suscitado las mayores dificultades precisamente en este país. De todas maneras, aunque con algunas diferencias (como la del modelo anglosajón), los nacionalismos europeos y las ideologías de los Estados-naciones han fomentado la preeminencia, cuando no la exclusividad, de determinadas expresiones culturales.

En adelante, ¿el objetivo de la integración socio-cultural habrá de ser producir auténticos franceses o ingleses a partir de los niños inmigrantes? ¿O la asimilación estable de las nuevas poblaciones consistirá en una co-asimilación mutua? Y, como cuestión previa, ¿es posible definir un modelo de cultura a partir del cual deberían deducirse las normas de convivencia social entre ciudadanos de diversa procedencia? Además, ¿qué porcentajes de población extranjera es capaz de «asimilar» una sociedad determinada? Parece arriesgado

intentar responder a priori a estas preguntas. Sin embargo, de forma más o menos explícita, esas preguntas están presentes ya desde ahora en la sensibilidad colectiva y no dejan de generar una cierta angustia social ante la posible pérdida de identidad, en una sociedad como la española en la que el 48,9% se considera muy racista o bastante racista.

¿Pérdida de valores culturales?

Este reflejo de angustia ante el extraño o el extranjero no es exclusivo de las capas menos cultas de la sociedad. Recientemente, Huntington, el conocido intelectual norteamericano autor del muy discutido ensayo *El choque de civilizaciones*, ha señalado a la inmigración mexicana como la peor amenaza para la identidad de los EE UU al anunciar la próxima aparición de otro panfleto suyo que llevará el significativo título de *Who are we?* Seguramente, el dogma de la superioridad de la cultura occidental va a sufrir serias embestidas. Y, como sucede ya en los cambios generacionales, se producirá una pérdida de ciertos valores culturales que parecían indiscutibles y la adquisición de otros nuevos, sin que sea posible predecir si la suma resultante tendrá signo positivo o negativo. De hecho, algunos valores se están perdiendo ya, en parte como consecuencia de la desestructuración de no pocos países del Sur y de la consiguiente oleada de inmigrantes.

Desde ahora, puede afirmarse que estamos asistiendo a la renuncia por parte de nuestros países occidentales a uno de sus más preciados valores morales: el derecho de asilo o la protección de las personas perseguidas por sus convicciones políticas o religiosas o por motivos étnicos. El pasado mes de febrero, el Parlamento de los Países Bajos (una tierra hasta ahora considerada abierta y acogedora) aprobó por amplia mayoría la decisión de expulsar a 26.000 extranjeros indocumentados hacia países tan peligrosos como Chechenia, Afganistán y Somalia. Ahora bien, el derecho de asilo está consagrado por la Convención de Ginebra de 1951 y fue adoptado por el tratado europeo de Ámsterdam (1997) como pieza esencial de la política migratoria de los Quince.

Con ser éste el más llamativo, no constituye sin embargo un gesto aislado en ese sentido dentro de Europa. Actualmente, el mecanismo ideológico y jurídico de la UE contra la práctica del derecho de asilo funciona siguiendo los pasos siguientes: hablar de la intolerable presión en las fronteras, a continuación discutir el fundamento de la demanda de asilo y, finalmente, alejar a los refugiados de las miradas de la sociedad civil (lo cual equivale a optar por el sistema de los campos de concentración). Por lo que se refiere a nuestro país, el presidente de la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR) escribía a comienzos de este año: *«Hoy en día –resulta muy doloroso confesarlo– España es una tierra hostil a los refugiados (...) La España democrática de 2003 ha olvidado a la España sangrienta de 1939, que vio a centenas de millares de hijos suyos huir del régimen de terror de Franco y buscar cobijo en diferentes rincones del planeta»*. Las trescientas personas inscritas y rechazadas en Ceuta son un ejemplo de esta nueva postura.

Abiertamente se utilizan nuevos conceptos, como el de «falso refugiado» o «refugiado económico», o nuevos principios como el que proclama que «el exceso de asilo mata al asilo». Hasta hace poco, Francia se proclamaba con orgullo «patria de los derechos humanos»; pero cabe prever que, en adelante, sus políticos intentarán que ese eslogan se borre cuanto antes de la memoria colectiva. Y en toda Europa se habla abiertamente de «países de emigración ilegal»; esta expresión constituye por sí misma un ultraje a la Declaración universal de los derechos humanos, que consagró el derecho a la emigración. Manifiestamente, los grandes contingentes de emigrantes y refugiados están ya afectando, sin pretenderlo, a nuestro sistema de valores (no olvidar, por otro lado, que el número de refugiados es mucho más elevado en el Sur).

En suma, las actuales estructuras económicas mundiales están fomentando excesivos e incontrolados movimientos migratorios que convergen hacia los países más ricos del hemisferio Norte. Estos emigrantes –y las sociedades de las que proceden– fueron los primeros

en experimentar los efectos perversos de dichas estructuras. Ahora la ola alcanza a las riberas del Norte. Es hora de que, dejando los habituales cálculos a corto plazo, se intente buscar la solución al problema de la inmigración permitiendo, por ejemplo a través de un comercio verdaderamente libre, la instauración en los países del Sur de unas economías sólidas capaces de proporcionar empleo y un porvenir digno a sus propias poblaciones. ■